

Senado de la Nación  
Secretaría Parlamentaria  
Dirección General de Publicaciones

(S-0059/15)

Ciudad de Buenos Aires, 2 de marzo 2015

Sr. Presidente de la  
Honorable Cámara de Senadores de la Nación  
Lic. Amado Boudou  
Su despacho.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del Expediente S-2104/13, Proyecto de Ley Instituyendo el Mes de Noviembre de cada año como “Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia de Género”. N° DAE 76.

Se acompaña copia del proyecto original.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

María L. Leguizamón.-

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Institúyase el mes de Noviembre de cada año como “Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia de Género”

Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en el mes de Noviembre de cada año, y en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 26.485 “Ley de Protección Integral a las Mujeres”, la Jefatura de Gabinete de Ministros-Secretaría de Gabinete y Gestión Pública-, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Justicia y la Secretaría de Seguridad (actualmente Ministerio de Seguridad), desarrollarán diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de la Violencia de Género.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

María L. Leguizamón. –

## FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine a la mujer, impidiendo su adelanto pleno.

Por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, (Asamblea General de Naciones Unidas, 1999).

Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como circunstancial a la condición humana, pero no así. Es posible prevenirla, disminuir sus efectos así como reorientar por completo las culturas en las que impera. Esta definición taxativa orienta el Informe Mundial sobre la violencia y la salud, de la OMS del año 2003.

Algunos de los daños que provoca la violencia son visibles porque dejan marcas en el cuerpo, pero muchos otros son invisibles porque sus marcas quedan ocultas a la mirada del común de la gente, pero resultan igualmente indelebles. La OMS indica que las consecuencias de la violencia en la salud provocan afecciones físicas, psíquicas y del comportamiento, sexuales y reproductivas y consecuencias mortales, asimismo, los efectos dañinos de la violencia familiar se extienden a los hijos que presencian dichos episodios.

La violencia no solo cobra un tributo humano sino también económico a las naciones, y cuesta a las economías miles de millones de dólares cada año en concepto de asistencia sanitaria, costos legales, ausentismo y productividad perdida. Las pruebas conocidas demuestran que las víctimas de la violencia doméstica y sexual padecen más problemas de salud, generan costos de asistencia sanitaria significativamente mayores y acuden más a menudo a los servicios de urgencia a lo largo de su vida que las personas que no sufren maltrato. Estos costos contribuyen

sustancialmente a incrementar los gastos anuales de asistencia sanitaria.

Desde principios de los años ochenta, el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso valioso en la respuesta a la violencia. Su punto de partida se encuentra en la solida convicción de que el comportamiento violento y sus consecuencias pueden prevenirse, así como reorientar por completo las culturas en las que impera. La Organización Mundial de la Salud (2003) realizó un extenso estudio sobre la salud y la violencia para pronunciarse acerca de este flagelo de la humanidad.

El enfoque de la salud pública también hace hincapié en la acción colectiva; y ha demostrado una y otra vez que las iniciativas de cooperación de sectores tan diversos como los de la salud, la educación, los servicios sociales, la justicia y la política, son necesarias para resolver problemas que por lo general se consideran netamente “médicos”.

Hacia fines de los noventa, la ONU declaró Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al 25 de noviembre, celebrándose en todo el mundo.

Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en nuestro país en el año 2009, promueve una modalidad de abordaje interdisciplinario e intersectorial, basada en los principios de atención primaria de la salud y orientado al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales, e insta a la creación de servicios de promoción y prevención en salud mental.

Estudios de la última década pusieron en evidencia el alto costo para la salud pública y para el desarrollo de los países, de la violencia contra la mujer. A partir de entonces, desde diferentes ángulos de la sociedad, se han organizado un sinnúmero de esfuerzos para la promoción y difusión de una temática compleja que afecta a todos los países del mundo.

Por otra parte la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), como la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para, 1994), aprobadas por las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, obligan a los Estados a impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En nuestro país se han producido transformaciones positivas para las mujeres tales como, la elección de un significativo número de legisladoras en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, y que dos prestigiosas juristas han sido designadas Ministras en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tampoco puede omitirse la sanción de numerosas leyes consagrando la vigencia de distintos derechos de las mujeres, tales como, la Ley 26.130 para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la Ley N° 26.171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley N° 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley N° 26.472 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que contempla el supuesto de Prisión Domiciliaria para Madres con hijos menores de cinco (5) años, entre otras.

La Ley N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” se dictó con el objeto de promover acciones tendientes a garantizar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia.

En virtud de dicha normativa el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia, y por tanto debe impulsar todas las acciones que se encuentren a su alcance para el logro de estos objetivos.

En base a ello, la fijación de un mes en el año para desarrollar acciones de concientización en la población sobre el flagelo que implica dentro de la sociedad la violencia de género, como una actividad preventiva, adquiere vital importancia.

Señor Presidente por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con su aprobación el presente proyecto de Ley.

María L. Leguizamón. –